



EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

La consultoría en asuntos públicos es un ámbito de actividad creciente en Colombia que convoca actores cada vez más diversos en la medida en que participen del proceso de formulación, ejecución y evaluación de intervenciones públicas. En el campo de la consultoría, la metodología se constituye en un factor diferenciador para promocionar los servicios dirigidos a aportar a la construcción y la difusión de conocimiento, así como a arrojar recomendaciones con fuerza de propuesta.

En vista de la diversidad de objetos de las consultorías en asuntos públicos, las metodologías

utilizadas toman elementos de varios campos y disciplinas: la investigación científica en ciencias sociales, el análisis de políticas públicas, la formulación de proyectos y la gerencia de proyectos.

El aporte del **Manual para la consultoría en asuntos públicos**, Universidad del Externado, escrito por Sarah Tadlaoui, consiste en capitalizar las fortalezas y los elementos relevantes de cada uno de estos campos en una guía conceptual y metodológica para orientar el proceso de consultoría para asuntos públicos.

Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla Castro.
Jefe de Redacción: Elber Gutiérrez Roa.
Editor Multimedia: Leonardo Rodríguez.
Jefe de Clero: Ricardo Avila Palacios.
Coordinador Opinión: Andrés Páramo Izquierdo.
Editores:
Arte y Gente: Fernando Araújo V.
Deportes: Olga Lucía Barona.
Internacional: Angélica M. Lagos C.
Investigaciones: Norbey Cuervo H.
Judicial: Juan David Laverde P.

Política: Hugo García S.
Negocios: Edwin Bohórquez Aya.
Bogotá: Juan Camilo Maldonado.
Vivir: Pablo Correa.
Redacción Comercial: Mariana Suárez.
Redacción:
Política: Felipe Morales, Alfredo Molano y Natalia Herrera.
Arte y Gente: Juan Carlos Piedrahíta, Santiago La Rotta y Juan David Torres.

Deportes: Luis G. Ordóñez, Luis G. Montenegro.
Judicial: Diana Durán, John Alexander Marín C.
Bogotá: Verónica Téllez, Camilo Enrique Segura y Santiago Valenzuela.
Negocios: Jairo Chacón, David Mayorga, y Hector Sandoval.
Vivir: Carolina Gutiérrez Torres, Angélica Cuevas.
Internacional: Diego Alarcón, Daniel Salgar.
Pais: Oscar Güersquén.
Redacción Comercial: Sergio Silva, Pilar Cuatras y Jheli Mahecha.

Editor Gráfico: Julio César Carrero Ladino.
Diseño: William Niampira, Andrés Sánchez, Heidy Amaya, Carolina Navarro M. y William Botla Suárez.
Infografía: Jonathan Bejarano.
Editor Fotográfico: Nelson Sierra G.
Fotografía: Oscar Pérez, David Campuzano, Luis Ángel S. Gustavo Torrijos y Andrés Torres.

¿Una reforma judicial pero quirúrgica?

RODRIGO UPRIMNY*



LOS ESCÁNDALOS RECIENTES DE corrupción en la Rama Judicial son graves y se suman a otras deficiencias del sistema judicial, como su morosidad en ciertos campos. Algunos plantean entonces una reforma total a la justicia, como si ésta hubiera colapsado.

Pero no es así: al lado de esos problemas, la justicia colombiana tiene grandes fortalezas. Por ejemplo, la justicia colombiana es bastante independiente, pues la mayor parte de los jueces han llegado a su cargo por concurso y no deben favores. La tutela, a pesar de ciertas distorsiones, funciona bastante bien para la protección de los derechos fundamentales. Y el sistema judicial ha sido en muchos casos un contrapeso valioso a los excesos presidencialistas y a los abusos de las fuerzas políticas.

El desafío es entonces lograr una reforma a la justicia que preserve sus fortalezas, que no son pocas, pero al mismo tiempo corrija sus deficiencias, que tampoco son pocas. El riesgo de promover atropelladamente una reforma total es que aniquilemos los elementos positivos de nuestro sistema judicial sin realmente avanzar hacia una justicia eficiente y garantista. Eso fue lo que pasó con la abortada reforma judicial del año pasado.

Tal vez sea mejor pensar entonces en una reforma judicial puntual y quirúrgica. Que sea viable y modifique aquello que esté ocasionando los principales problemas. Y eso es posible, pues hay una evidencia clara y un cierto consenso político de que uno de los factores esenciales de ciertos deterioros de nuestro sistema judicial es el mal diseño del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), tanto de su Sala Disciplinaria (SD) como de su Sala Administrativa (SA).

No se trata de suprimir el CSJ, pues, por razón de la independencia judicial, la rama debe tener un órgano de autogobierno y una instancia disciplinaria interna. Pero, como lo hemos desarrollado en otros escritos en *Dejusticia*, la SA y la SD fueron mal diseñadas y esos defectos irradian a toda la justicia, lo cual es normal, pues si los órganos de gobierno y de control de una institución funcionan mal, eso afecta a toda la institución.

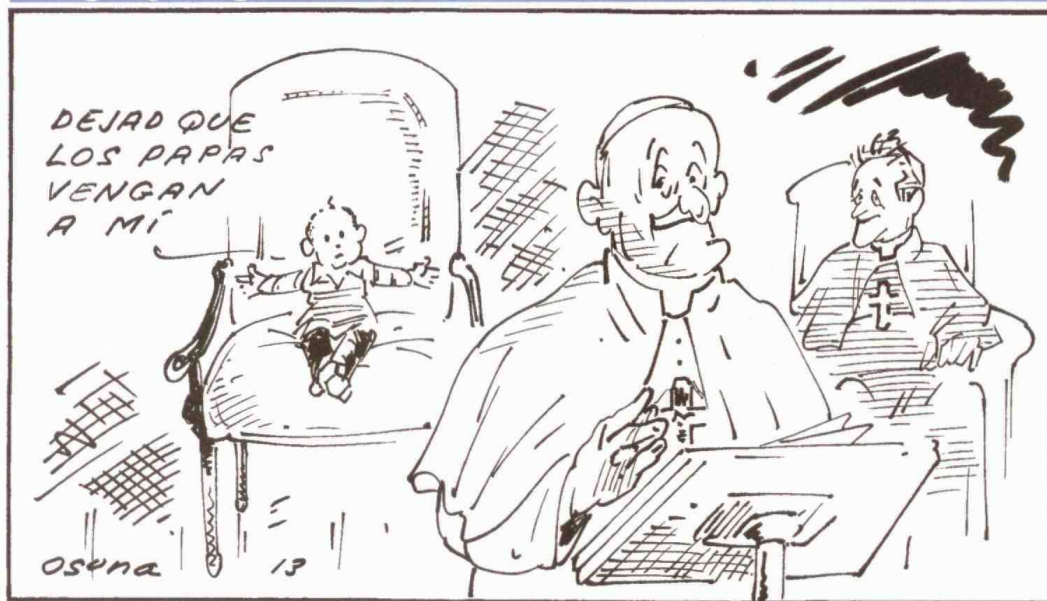
Deberíamos realizar entonces una reforma judicial puntual, pero profunda: corregir los defectos del diseño institucional de la SA y de la SD. Tendríamos así la institucionalidad necesaria para solucionar los problemas de la justicia que interesan al ciudadano de a pie, como la dificultad que tienen para acceder a ella.

Es un gran honor haber obtenido el Premio Simón Bolívar a la mejor columna en prensa escrita. Pero quiero hacer una confesión, que espero no provoque la nulidad del premio. Mis columnas no son totalmente mías, pues antes de enviarlas para su publicación son leídas y criticadas por mis colegas de *Dejusticia* y por mi esposa. Su juicio severo, pero afectuoso, me ha evitado errores e incongruencias. Y por ello les dedico mi premio, pues, aunque asumo la responsabilidad de lo que escribo, entiendo que mis columnas son, en cierta medida, una obra colectiva.

* Director de *Dejusticia* y profesor de la Universidad Nacional.

Rasgos y Rasguños

Por Osuna



En el trono de San Pedro

Notas de campo

ALFREDO MOLANO BRAVO



PITALITO ES UNA VEREDA DE CHIMICHAGUA, Cesar, piedemonte de la serranía del Perijá, conformada por dos fincas: San Miguel y Pitalito. Hasta 1980, cuando fueron abandonadas, eran de la familia Chacón. Los campesinos las trabajaron y las dividieron en 14 parcelas; formaron una junta de acción comunal, organizaron una tienda comunal, construyeron una escuela y arreglaron las vías. Sembraron yuca, ahuyama y principalmente maíz, que vendían en Curumani. Nadie reclamó nada a nadie. Entre 1998 y 2005 los parceleros vivieron una terrible ola de asesinatos y robo de ganado; unas 30 familias salieron a vivir en los pueblos cercanos o en Venezuela. En 2006 empezó la gente a retornar. Organizaron de nuevo la vereda, reconstruyeron la escuela y solicitaron al Inceder la titulación de sus predios, pero el gerente de la época respondió que la zona estaba dentro de la reserva forestal, Ley Segunda.

Según testigos, el 16 de enero de 2010

apareció con el Ejército un tal Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, apodado *El Capitán*, a tomar posesión de las tierras argumentando tener los títulos. Como los campesinos carecían de papeles, el supuesto propietario les dijo: "Me venden o me venden". Los campesinos temblaron y le suplicaron al Ejército que no los sacara. En esos tiempos, paramilitares y militares andaban juntos. La maestra le dijo al *Capitán*: "Al menos respete la escuela". El señor Fernández respondió: "Me vale huevo". Los campesinos bajaron a Curumani a denunciar la amenaza y cuando regresaron, les habían tumbado los ranchos. Un mes más tarde llegó un grupo de sicarios guajiros y a la madrugada mataron los perros. Una amenaza tétrica. El 24 de junio regresaron acompañados del Esmad, el Ejército y funcionarios de las alcaldías de Chimichagua y Curumani, entre ellos el personero, en representación de la Defensoría del Pueblo. Sacaron en camiones y zorras a todos los vivos y los trasladaron a la hacienda La Esperanza, del mismo Fernández; más tarde los llevaron a la vereda Galaxia, donde fueron amenazados con quitarles los niños si intentaban una nueva invasión de predios. Los menores de edad no pueden estar sometidos al delito, dijeron. Fernán-

dez "nos obligó a firmar un papel con el Ejército a un lado y nos dio lo que quiso". El personero levantó un acta afirmando que "todo había sido voluntario". Denunciaron los atropellos ante el gobernador de Cesar, que les dijo: "Devuélvanse, esas tierras son de ustedes".

El 21 de mayo de 2013 regresaron a sus parcelas, convencidos de que la Ley de Tierras los protegía. Volvieron a levantar ranchos; hicieron un salón comunal donde los niños recibían las clases, y sembraron de nuevo maíz, yuca, habichuela, tomate y patilla. El pasado 25 de octubre entró el Esmad, acompañado de la Sijin, del procurador provincial y varios sujetos. Los campesinos fueron acusados de cultivar coca. Las autoridades desalojaron a los parceleros a pesar de que tanto Pitalito como San Miguel están bajo la protección del Inceder. Los trasladaron a un albergue pagado, sostiene, por el mismo señor Fernández, que fue uno de los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y es propietario de varias haciendas cultivadas en palma. Más tarde les destruyeron con motosierra los ranchos y todas sus pertenencias. Hasta las botas de caucho fueron destruidas con la máquina. Una terrorífica sugerencia hecha a 17 familias: 24 niños y 30 adultos.